

COMITÉ DE APELACIÓN

Expediente nº 82 - 2018/19

Reunido el Comité de Apelación, que forman D. Miguel Díaz y García Conlledo, doña Elena Roldán Centeno y doña Concepción Escobar Hernández, para resolver el recurso interpuesto por el REAL BETIS BALOMPIÉ, SAD, contra la resolución del Comité de Competición de la RFEF de fecha 10 de octubre de 2018, en relación con la celebración del partido correspondiente a la jornada 8 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, disputado el día 7 de octubre de 2018 entre el Club Atlético de Madrid, SAD y el Real Betis Balompié, SAD, tras examinar el escrito de recurso, el acta arbitral y demás documentos que obran en el expediente, adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero.- El acta arbitral del referido encuentro, en el apartado 1. Jugadores (incidencias visitante), bajo el epígrafe A. Amonestaciones, literalmente transcrito, dice: *“Real Betis Balompié SAD: En el minuto 85, el jugador (5) Marc Bartra Aregall fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor”*.

Segundo.- Vistos el acta y demás documentos correspondientes al referido encuentro, el Comité de Competición, en resolución de fecha 10 de octubre de 2018, acordó amonestar al citado jugador por emplear juego peligroso, con multa accesoria al club en cuantía de 180 €, en aplicación de los artículos 111.1.a) y 52.3 del Código Disciplinario de la RFEF.

Tercero.- Contra dicho acuerdo se ha interpuesto en tiempo y forma recurso por el Real Betis Balompié, SAD.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.- Tal y como se establece en el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, “el árbitro es la autoridad deportiva única e inapelable, en el orden técnico, para dirigir los partidos” (artículo 236, párrafo 1) y entre sus obligaciones está la de “amonestar o expulsar, según la importancia de la falta, a todo futbolista que observe conducta incorrecta o proceda de modo inconveniente y asimismo a entrenadores, auxiliares y demás personas reglamentariamente afectadas” (artículo 237, párrafo 2, apartado e); así como la

COMITÉ DE APELACIÓN

de “redactar de forma fiel, concisa, clara, objetiva y completa, el acta del encuentro, así como los informes ampliatorios que estime oportunos, remitiendo, con la mayor urgencia y por el procedimiento más rápido, una y otros, a las entidades y organismos competentes” (artículo 238, apartado b). El valor probatorio de dichas actas es evidente, ya que –como se establece en el artículo 27 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol- “las actas suscritas por los árbitros constituyen medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y norma deportivas” (párrafo 1). A lo que añade que “en la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto” (párrafo 3). Así mismo, en materia de amonestación y expulsión, el art. 130.2 del mismo Código, establece: “Las consecuencias disciplinarias de las referidas expulsión podrán ser dejadas sin efecto por el órgano disciplinario, exclusivamente, en el supuesto de error material manifiesto”.

Segundo.- No es función del órgano disciplinario en ningún caso valorar la aplicación e interpretación de las reglas del juego, pues ello es “competencia única, exclusiva y definitiva de los árbitros, sin que los órganos disciplinarios federativos puedan conocer de las mismas”, como establece el art. 111.3 del citado Código Disciplinario. Por el contrario, el órgano disciplinario, en el ejercicio de sus funciones, debe tener en cuenta lo señalado en el anterior fundamento jurídico, en especial por lo que se refiere a la presunción de veracidad de las actas arbitrales, y debe analizar de modo riguroso toda alegación y prueba relativa a la existencia de un error material manifiesto.

En tal sentido, este Comité de Apelación y el propio Tribunal Administrativo del Deporte han resuelto de manera clara y contundente en diferentes Resoluciones la necesidad de que las pruebas aportadas demuestren de manera concluyente el manifiesto error del árbitro. En concreto, el TAD, en su Resolución de 29 de septiembre de 2017 (Expediente 302/2017), ha señalado que “cuando el referido artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF señala que las decisiones arbitrales sobre hechos relacionados con el juego son “*definitivas presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto*” está permitiendo que el principio de invariabilidad (“*definitiva*”) del que goza la decisión arbitral en favor de la seguridad jurídica, en este caso, de las Reglas del Juego, pueda sin embargo mitigarse cuando concurriese un “*error material manifiesto*”, en cuanto modalidad o subespecie del “error material”, es decir que se trate, como ha señalado el Tribunal Constitucional, cuando se ha referido a este término en las leyes procesales (vid. Artículos 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 267.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse”.

COMITÉ DE APELACIÓN

Tercero.- Para la decisión sobre la existencia o no de un error material manifiesto por parte del árbitro se ha de acudir a las pruebas aportadas, siendo de especial valor en estos supuestos la videográfica, como la que aporta el Club recurrente. Esta prueba está claramente admitida en la legislación española como medio probatorio (así, el art. 382 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), al igual que lo reflejan múltiples resoluciones del TAD.

El Club recurrente aporta una prueba videográfica de la jugada en cuestión, como apoyo de su pretensión de que no hubo derribo del jugador del equipo contrario por parte del jugador propio, añadiendo valoraciones sobre la actitud del jugador del equipo contrario supuestamente derribado, que no compete valorar a este Comité.

Revisada reiteradamente por este Comité la prueba videográfica admitida y haciendo uso de las posibilidades que la tecnología ofrece (ralentización, parada de la imagen, etc.) que, desde luego, no estaban al alcance del colegiado, se llega a la conclusión de que, aunque la decisión arbitral pueda ser comprensible por la posición del árbitro y la rapidez de la jugada, existió, como señala el Club recurrente, un error material manifiesto por parte del árbitro, pues los miembros del Comité observamos unánimemente que el jugador del Club recurrente no derribó al contrincante, sino que cayó en la inercia de un lance inmediatamente anterior sin que realice una acción de derribo en la disputa del balón (a lo sumo, habría un choque y ello no está claro), sin que este Comité pueda juzgar con la prueba aportada la existencia o no de jugada prometidora y sin que, como se ha dicho, deba entrar a valorar la actitud del jugador contrario, y tampoco la calificación técnica de la jugada, que no es de su competencia.

Cuarto.- La apelación por el Club recurrente a una interpretación pro deportista en caso de duda (que encuadra dentro del principio in dubio pro reo o pro administrado no necesita ser examinada aquí, puesto que se ha afirmado la existencia de un error material manifiesto (aunque posiblemente comprensible) por parte del árbitro y, por lo tanto, no existe duda. No obstante, cabe observar que, frente a la presunción de veracidad del acta arbitral, solo derrotable en caso de un error material manifiesto, queda poco espacio para la aplicación de dicho principio, pues, de existir duda sobre el error, este no sería manifiesto y, por lo tanto, no podría oponerse a la presunción de veracidad del acta.

Quinto.- En virtud de lo anterior, al demostrar la prueba aportada un error material manifiesto por parte del colegiado, queda desvirtuada la presunción de veracidad de lo que este expresó en el acta y procede estimar el recurso.

COMITÉ DE APELACIÓN

En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación,

ACUERDA:

Estimar el recurso formulado por el club Real Betis Balompié, SAD, que impugnaba la resolución del Comité de Competición de fecha 10 de octubre de 2018, decayendo también por tanto la correspondiente sanción.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación.

Las Rozas (Madrid), a 29 de octubre de 2018.

El Presidente,